

## **A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS**

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el diputado adscrito al Grupo Parlamentario de Izquierda Plural formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.

En 2007, el Gobierno de España lanzó y publicitó ampliamente bajo el lema “Estudiar no cuesta tanto”, una nueva línea de financiación para personas que desearan realizar cursos de posgrado oficiales y no tuvieran disponibilidad económica, a través de una línea de crédito ICO con condiciones ventajosas para los solicitantes llamada “Préstamo Renta Universidad”. Dentro de las ventajas de la citada línea, se incluía el interés cero y la posibilidad de prorrogar su amortización si no se superaba una renta anual de 22.000 euros. Incluso, si en 15 años no superaban dicho umbral de renta, el crédito prescribía.

El “Préstamo Renta Universal” fue promocionado por el Estado y las entidades bancarias como una apuesta por el futuro laboral de los españoles con la previsión de que los estudiantes que cursaran un posgrado pudieran acceder al mercado laboral y, en última instancia, estuvieran en condiciones de devolver el préstamo. Esto animó a muchos jóvenes a lanzarse a pedirlo con la esperanza de que sirviera para abrirse camino en un futuro nada alentador para el mundo laboral. Pero con el tiempo las condiciones fueron endureciéndose gradualmente, sustituyendo el interés cero por un tipo de interés fijo cotizado por el ICO y eliminando por completo el límite de los 22.000 euros de renta anual para poder prorrogar su amortización.

Hace algún tiempo el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte anunció una ampliación de la carencia y amortización, medida que ha supuesto un alivio para algunos beneficiarios de los préstamos. Sin embargo, los estudiantes afectados han tenido que hacerse cargo de todos los gastos derivados de esa ampliación, que incluye también un cambio de intereses y gastos de notaría. En este sentido, se trata de una medida totalmente insuficiente.

La mayor parte de los beneficiarios de la línea ICO-Préstamo Renta Universidad no encuentra trabajo o, en el mejor de los casos, están empleados en condiciones precarias. Sumado a ello, muchos han denunciado que han sufrido publicidad engañosa, tanto por parte del Gobierno como de las entidades financieras. Incluso han llegado a denunciar que en el momento de firmar la póliza no fueron informados de las condiciones del préstamo por parte del notario. En este contexto, las autoridades competentes deberían asumir su parte del contrato social implícito y ser conscientes de que vivimos una situación excepcionalmente negativa que no fue prevista por ninguna de las partes contratantes.

**¿Ha llevado a cabo el Gobierno alguna acción –más allá de la aplicación de la carencia- para dar respuesta a la problemática que están sufriendo multitud de estudiantes que firmaron un “Préstamo Renta Universidad”?**

**¿Están disponibles los convenios de colaboración firmados en su día entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el ICO y las entidades bancarias?**

**¿Tiene conocimiento el Gobierno de que muchos de los estudiantes firmantes del “Préstamo Renta Universidad” se vieron expuestos a publicidad engañosa en la que se promocionaban las ventajosas condiciones de convocatorias anteriores, cuando éstas ya habían sido modificadas?**

**¿Está dispuesto el Gobierno a interceder para que todos los beneficiarios del “Préstamo Renta Universidad” tengan las mismas condiciones de devolución, esto es, las de la convocatoria 2007/2008?**

**¿Cuál es el origen del presupuesto destinado a los “Préstamos Renta Universidad”?**

**¿Está de acuerdo el Gobierno en que las autoridades competentes (entidades bancarias, ICO y Estado) deberían asumir su parte de responsabilidad en todo este problema?**

Palacio del Congreso de los Diputados

Madrid, 25 de febrero de 2015

Joan Coscubiela Conesa